

El próximo 1 de julio se realizarán elecciones generales en Bolivia. Después de casi una década de dictadura militar, hay indicios de que éstas serán democráticas y que las Fuerzas Armadas, unos 30.000 hombres, acepten el veredicto de las urnas. Las elecciones de julio pasado, por otra parte, constituyeron un serio revés para el oficialismo y para su candidato, el general Juan Pereda Asbún, el hombre de Banzer. El Pacto Militar-Campesino, firmado por dirigentes burócratas, no aseguró el triunfo del continuismo, encarnado en la hoy disuelta Unión Nacionalista del Pueblo (UNP).

El electorado boliviano, de uno de los países históricamente más atrasados de América Latina, con un ingreso por habitante anual de 320 dólares (sólo el de Haití es inferior, con 162), sin salida al mar desde hace un siglo, con riquezas mineras mal aprovechadas y mal vendidas, con un 40 por 100 de analfabetismo, dijo "no" a la dictadura de Hugo Banzer y a sus herederos, luego de gobernar durante siete largos años.

Bolivia, con seis millones de habitantes, de los cuales el 54 por 100 son de raza indígena, el 31,2 mestizos y el 14,8 blancos, y con un promedio de vida de tan sólo cuarenta y seis años, atraviesa una seria crisis económica.

La actual Junta Militar que gobierna Bolivia "se apoderó del Gobierno el 24 de noviembre último con la voluntad declarada de culminar el proceso de constitucionalización presidiendo elecciones generales 'libres, democráticas y honestas' el 1 de julio próximo..." ("Coyuntura"). Dos semanas después de haber derrocado al general Pereda, el heredero de Banzer, la Junta invitó oficialmente a nueve partidos y frentes políticos a "conformar una Comisión electoral que, en el tiempo más breve posible, estudie la actual Ley Electoral y sugiera las medidas más adecuadas para superar el concepto generalizado del fraude electoral".

Poco después la CE fue ampliada, y 22 fuerzas políticas en total se incluían en ella. La CE exigió a la Junta Militar la retirada de las tropas militares acantonadas en las zonas mineras, la cancelación del llamado Pacto Militar-Campesino (que impide la actividad política en el campo) y la disolución de los organismos represivos: la Dirección del Orden Público y el Servicio de Inteligencia del

do por la Junta Militar es el sistema de representación proporcional.

Unidad campesina

Una de las consecuencias más importantes del golpe es que aceleró el proceso de unificación sindical de los campesinos. En este proceso, que deberá culminar en un congreso nacional campesino único, participan la Confederación Nacional de Traba-

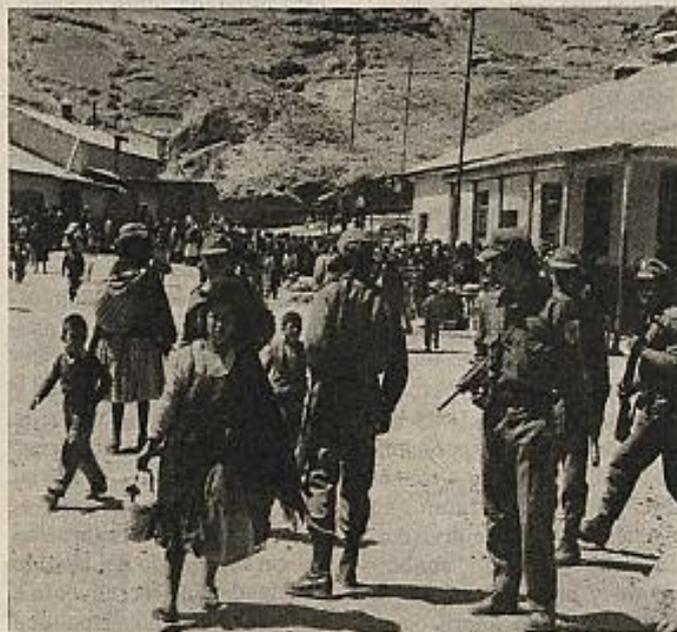
baja del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. Los dirigentes oficialistas denunciaron este hecho a la Policía y los de la CNTCB/TK se declararon en huelga de hambre en el edificio de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, una de las federaciones más importantes del país. Al día siguiente, sorpresivamente, el general Padilla citaba a dirigentes de ambas centrales en conflicto para llegar a un acuerdo. El Gobierno tomó entonces una decisión que asombró: entregó la sede en disputa a los dos nucleamientos opositores con la condición de que convoquen un Congreso nacional campesino único en el plazo de noventa días. El Comité unificador quedó constituido por miembros de las cinco centrales: siete por la CBCR, seis por la CNTCB/TK, diez por la CNBCB, seis por la CICB y dos por la CNTCB.

Mientras tanto, los candidatos presidenciales se han puesto en movimiento. Uno de ellos es el ex Presidente Víctor Paz Estenssoro, quien en 1952 nacionalizó las minas de Catavi, Siglo XX y Cerro de Potosí, propiedad de las familias Aramayo, Patiño y Hochschild, respectivamente, que producían el 74 por ciento del estaño boliviano, el principal producto de exportación. Además estableció el sufragio universal y una especie de reforma agraria. Paz Estenssoro encabeza una coalición de su partido con el PDC y con el FRI. Banzer, por su parte, Presidente siete años, ha sido proclamado por el Partido Social-Cristiano, ex integrante de la Unión Nacional del Pueblo, creada al amparo del Gobierno anterior. El Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), por su parte, eligió como candidato al ex Presidente Hernán Siles Suazo. Por su parte, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) proponía a Jaime Paz Samora como compañero de fórmula de Siles Suazo, en un intento de frente popular. El PDC, en cambio, decidió dejar en manos de una conferencia nacional de dirigentes la nominación de sus candidatos. El MNR y el PRA están tratando de unificar esfuerzos. ■

Bolivia

EL 'CARNAVAL POLITICO' LLEGA A SU FIN

RICARDO LORENZO y HECTOR ANABITARTE



Con seis millones de habitantes, de los cuales el 54 por 100 son indígenas, y un promedio de vida de tan sólo cuarenta y seis años, sufre una seria crisis económica.

Estado. Pero el Gobierno rechazó estas exigencias.

A pesar de tales negativas, los partidos consideraron necesario permanecer en la CE e inclusive han postergado algunos de sus reclamos. Uno de ellos era el de generalizar el derecho a voto a partir de los dieciocho años de edad, ya que constituía un precedente de modificación de la Constitución. Actualmente, sólo los casos entre dieciocho y veintún años pueden votar. Lo que sí fue aprobado y acepta-

do por la Junta Militar es el sistema de representación proporcional. jadores Campesinos de Bolivia/Tupaj Katari (CNTCB/TK), el Comité Nacional de Bases del Campesinado Boliviano (CNBCB), la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB), el Comité de Bases del Campesinado Revolucionario (CBCR) y la Confederación Independiente de Campesinos de Bolivia (CICB).

Este proceso se aceleró cuando en enero un grupo de dirigentes de la opositora CNTCB/TK intentó ocupar la sede de la oficialista CNTCB, que está ubicada en la planta